E) SISTEMA MATRIMONIAL

Matilde PINEDA MARCOS, *La nueva configuración del sistema matrimonial español*, Colex, A Coruña 2024, 237 pp.

La Constitución española de 1978 trazó las líneas de un sistema matrimonial facultativo, compuesto y de formación progresiva, que se vio confirmado en los años sucesivos por la aprobación de normas unilaterales del Estado y por normas pactadas con las confesiones religiosas más significativas. Es facultativo o de libre elección porque los contrayentes pueden optar entre celebrar matrimonio civil o, en su caso, matrimonio religioso con efectos civiles; lo que a su vez nos lleva a un sistema plural o compuesto porque, además del matrimonio civil y del matrimonio canónico, de gran tradición en el país, también se puede contraer matrimonio evangélico, judío o islámico con efectos civiles, en virtud de los Acuerdos de cooperación firmados en 1992 entre los representantes de estas confesiones y el Estado español. Y es un sistema de formación progresiva porque queda abierto a la incorporación de otros matrimonios religiosos por vía pacticia o mediante autorización unilateral del Estado (que debería ir precedida de negociación previa con confesiones sin acuerdo). Esto último es lo que ocurre a partir de 2015, cuando la declaración del notorio arraigo en España de una confesión religiosa lleva consigo el reconocimiento de efectos civiles de su matrimonio, en las condiciones establecidas.

La monografía de la profesora Pineda, de la Universidad de Alicante, es muy oportuna, porque ofrece una visión actualizada de la posición del matrimonio de las minorías religiosas en el ordenamiento español, en la medida que analiza las modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria y por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (LRC que, tras varios aplazamientos, adquirió plena vigencia el 30 de abril de 2021, a excepción de la gradual puesta en funcionamiento de la aplicación DICIREG, para lograr la completa informatización del Registro).

El volumen está estructurado en siete capítulos, una breve consideración final y la bibliografía. El primero, «Matrimonio religioso y ordenamiento jurídico español», es de carácter introductorio. Muestra de forma sumaria las novedades legislativas respecto a los matrimonios de las minorías religiosas, presenta algunos datos estadísticos de las respectivas confesiones y señala las dificultades que suelen encontrar *de facto* para que sus matrimonios accedan al Registro civil. Además, se detiene en los términos empleados para aludir al reconocimiento civil de los matrimonios religiosos, donde a veces se produce cierta confusión entre las categorías de inexistencia, nulidad e ineficacia del matrimonio, no solo por parte de algunos autores, sino también en algunos fallos judiciales.

El capítulo II se ocupa de los ámbitos temporal, personal y territorial de aplicación de las normas sobre los matrimonios de las minorías religiosas que producen efectos civiles en España. En cuanto al ámbito temporal, rige el principio de irretroactividad: 1) para los matrimonios evangélicos, judíos e islámicos contraídos en España a partir de la entrada en vigor de los Acuerdos de cooperación de 1992; 2) para los matrimonios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, las Comunidades Budistas integradas en la Federación de España y la Iglesia ortodoxa, que gozaban de notorio arraigo en España cuando entró en vigor el nuevo art. 60.2 del Código civil (2015), a partir de entonces; y 3) respecto a las confesiones que obtengan en lo sucesivo el notorio arraigo en España a los matrimonios celebrados desde ese momento, como sucedió en 2024 con la Comunidad Bahá'í, en aplicación del mismo precepto. La autora señala muy oportunamente algunas sentencias que no siguen el principio de irretroactividad. En cuanto al ámbito personal, es bastante amplio, pues puede suceder que uno de los dos contrayentes sea español o que los dos sean extranjeros, en cuyo caso podrían elegir una forma prescrita para los españoles o una forma reconocida por la ley personal de cualquiera de ellos (art. 50 CC). Aquí también la autora presenta varios casos conflictivos y las soluciones adoptadas. El ámbito territorial, reducido a los matrimonios contraídos en España, se corresponde con la personalidad de derecho interno de las respectivas confesiones religiosas; aquí las excepciones, como ya sucede en los otros ámbitos mencionados, se explican para hacer posible la percepción de la pensión de viudedad.

El capítulo III se centra en los requisitos que deben preceder a la celebración de estos matrimonios para ser reconocidos por el Estado: la tramitación de un expediente (ante el Letrado de la Administración de Justicia o el Encargado del Registro) o un acta notarial, donde los futuros contrayentes acrediten mediante una audiencia y otras posibles pruebas el cumplimiento de los requisitos civiles de capacidad e inexistencia de impedimentos. Su resultado favorable se materializará en el consiguiente certificado o resolución autorizando el matrimonio, que tendrá una validez de seis meses y que deberán presentar al ministro de culto (o equivalente), quien a su vez acreditará su condición de tal por medio de certificación expedida por la comunidad religiosa que corresponda. La profesora Pineda expone con detalle todas estas vicisitudes, desentrañando el alcance del art. 59 Código civil, los arts. 7 de los Acuerdos de 1992, los arts. 58 y 58 bis de la Ley del Registro civil y la Orden IUS/577/2016.

El capítulo IV examina la situación jurídica de los matrimonios de las minorías religiosas cuando no cumplen los requisitos establecidos en el capítulo anterior o la exigencia de que el consentimiento se preste en presencia del ministro de culto y, al menos, dos testigos mayores de edad; lo que, en palabras de los respectivos arts. 7.4 de los Acuerdos con la FEREDE y la FCJE, condiciona la «validez civil» del matrimonio. La autora apunta con acierto que se trata de una cuestión de ineficacia, no de nulidad. En cambio, ve una diferencia con el Acuerdo con la CIE, que no me parece tal, pues este también exige al matrimonio islámico que el intercambio del consentimiento se produzca ante el imam o dirigente religioso y dos testigos mayores de edad (art. 7.1); y, en términos similares, se expresa el art. 60.2.b CC respecto a los matrimonios de las confesiones con notorio arraigo pero sin acuerdo.

Merece una especial consideración las páginas de este capítulo dedicadas al matrimonio islámico y, más en concreto, a analizar si subsiste o no la posibilidad de celebrarlo directamente, sin expediente ni certificado civiles previos, trasladando al momento de la inscripción la superación del control estatal. La autora se centra en el tenor del art. 7 del Acuerdo reformado y, en contra de la doctrina mayoritaria, considera que sigue siendo posible. Desde luego, el tenor del precepto no es claro y permite entender que todo sigue igual. La cuestión es que el art. 4 de la Orden IUS/577/2016, de 19 de abril, permite sostener que ahora el sistema se unifica para los matrimonios evangélico, judío e islámico, porque los contrayentes deben presentar un ejemplar del acta o resolución previa de su capacidad «al oficiante ante quien se vaya a celebrar el matrimonio». Además, el preámbulo de dicha Orden alude a que se dio trámite a todos los entes representativos de las confesiones entonces afectadas, incluida la CIE (así que estaríamos ante una norma unilateral del Estado con negociación previa), por lo que decaería el argumento de que la Orden no puede prevalecer sobre el Acuerdo aprobado por ley ordinaria (y eso sin olvidar que su art. 7 se modificó en 2015 y no se siguió procedimiento formal bilateral alguno).

Otra cuestión que aborda el capítulo IV es si cabe un matrimonio religioso sin efectos civiles: es posible si no se tramita el expediente o acta previa; o si, habiéndolo hecho, no se presentan ante el ministro de culto (o equivalente) en el momento de la celebración. Y lo mismo sucede si, *a posteriori*, se solicita la inscripción en el Registro civil del matrimonio de minorías religiosas así celebrado y se comprueba que concurren los requisitos legales para su reconocimiento civil (cfr. art. 63 CC). Algo parecido podría ocurrir, y así lo señala la profesora Pineda, con los matrimonios religiosos que no reúnan inicialmente los requisitos establecidos en los Acuerdos de 1992 y en el art. 60.2 CC, pero sí cuando se solicita su inscripción.

El capítulo V analiza los requisitos civiles de capacidad y habilidad de los contrayentes, consentimiento y forma de celebración, que deben reunir los matrimonios de las minorías religiosas para ser reconocidos por el ordenamiento español. Esto significa que el reconocimiento de estos matrimonios es relativo y limitado, pues podría producir efectos civiles un matrimonio religioso aunque no reuniera los requisitos de validez establecidos por la propia confesión, pero sí por los fijados por la legislación civil. Aquí resulta especialmente significativo que el Estado ha impuesto la necesidad de que los contrayentes de estos matrimonios presten su consentimiento antes el ministro de culto (o equivalente) y dos testigos mayores de edad, prescindiendo de lo que disponen las confesiones minoritarias respecto a la forma, algunas de las cuales carecen de ministros o contemplan la posibilidad de celebrar el matrimonio sin él o no exigen que los testigos sean mayores de edad. En conclusión, no parece que el ordenamiento español reconozca la forma jurídica de estos matrimonios como tal sino solo la posibilidad de que el consentimiento se preste dentro de una ceremonia o rito religioso, pero cumpliendo los requisitos propios de la forma civil del matrimonio; con la salvedad de que el ministro de culto desempeña una función pública y por eso debe anotarse en el Registro de Entidades Religiosas (art. 18.1 RD 594/2025).

El capítulo VI gira en torno a la inscripción de los matrimonios de las minorías religiosas en el Registro civil, cuestión clave para que produzcan plenos de efectos civiles.

Tanto los respectivos arts. 7 de los Acuerdos de 1992 modificados, como el 58 bis LRC establecen que, una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto o dirigente religioso está obligado a promover la inscripción remitiendo por medios electrónicos la certificación expresiva de la celebración y su propia acreditación como oficiante, en el plazo de cinco días. Y esto sin perjuicio de la obligación de promover sin demora la inscripción que incumbe a «aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible» y otros (cfr. art. 42 LRC). Así pues, llegado a ese punto, la inscripción es obligatoria. La autora prosigue su exposición analizando los certificados mencionados y la responsabilidad penal por falsedad en la que pudiera incurrir quienes los expiden (art. 390.2 CP). También aborda otras cuestiones como el control de legalidad de los documentos presentados y de la realidad de los hechos contenidos en ellos; la posible denegación del acceso al Registro del matrimonio en virtud del art. 63.2 CC; y, por último, los supuestos del matrimonio no inscrito, pero inscribible, la inscripción tardía y el matrimonio no inscribible.

El capítulo VII parece dedicado a tratar la nulidad y disolución de los matrimonios de las minorías religiosas según las normas de las respectivas confesiones. Sin embargo, la práctica totalidad de sus páginas se refieren a la eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas, y no por vía de *excursus*, como sucede en los capítulos II a V con el matrimonio canónico, sino en el texto principal (algo que ocurre, aunque en menor medida en el capítulo VI). En mi opinión, la general irrelevancia civil de las decisiones de las confesiones minoritarias sobre sus matrimonios en el ordenamiento español no justificaba dedicarles todo un capítulo o, al menos, no con el enfoque adoptado. Desde luego, la atención que se presta al reconocimiento civil del matrimonio y de las resoluciones canónicas explican que el título mencione el sistema matrimonial español y no solo la posición que dentro de él ocupan los matrimonios de las minorías religiosas. Es una opción de la autora, pero no la comparto porque los cuatro *excursus* son excesivamente breves, por lo que no aportan demasiado; pero incluso las referencias, algo más extensas, de los capítulos VI y VII al matrimonio canónico, siguen siendo insuficientes y distraen la atención del tema principal.

Como es lógico, esto último no resta mérito al trabajo realizado por la profesora Pineda. En una valoración de conjunto, diría que su monografía es muy interesante y actual. Ofrece un minucioso y completo análisis de las normas que regulan los matrimonios de las minorías religiosas en el ordenamiento español, bien respaldado por las resoluciones judiciales y administrativas que las interpretan y aplican. Son abundantes las opiniones propias de la autora, en diálogo con esos pronunciamientos y con la doctrina, con las que trata de resolver los principales problemas que se han planteado hasta ahora. El libro interesará de modo particular a los cultivadores del Derecho matrimonial, eclesiasticistas y civilistas en su mayor parte, así como a los operadores del Derecho.

JAVIER FERRER ORTIZ